

Conflicto armado urbano y violencia homicida.
El caso de Medellín*

Por Jorge Giraldo Ramírez
Centro de Análisis Político
Universidad Eafit - Colombia

Resumen

El presente artículo analiza la relación entre la dinámica de un conflicto armado urbano y el comportamiento de la violencia homicida. A partir del estudio de la situación de Medellín durante los primeros cinco (5) años del presente siglo, se sostiene que las tasas de homicidio se comportan de manera directamente proporcional con la intensidad del conflicto armado.

Abstract

The article analyzes the relation between the dynamic of an urban armed conflict and the phenomena of the homicide violence. Based in the situation of Medellín during the first five years of the current century, it concludes that the homicide rates shown a directly proportion with the intensity of the armed conflict.

* Este artículo hace parte del trabajo de investigación “Análisis del desempeño de la seguridad en Medellín 2000–2005”, realizado por el Centro de Análisis Político de la Universidad Eafit para la Alcaldía de Medellín, y que contó, además, con la participación de los profesores William Restrepo Rianza y Juan Pablo Durán. La autoría del capítulo es personal. Las gráficas 1 y 2 y la Tabla 1 fueron elaboradas por Juan Pablo Durán.

Este artículo pretende demostrar que los incrementos de la tasa de homicidios en Medellín están vinculados con los ciclos del conflicto armado, lo que implica que los cambios en la dinámica de este afectan directamente la seguridad en la ciudad. En el desarrollo de la argumentación se sostendrá que (a) en Medellín se presentó un fenómeno de apaciguamiento y retiro del Estado, (b) que facilitó la articulación de los problemas de inseguridad ciudadana con los de seguridad del Estado. Adicionalmente, se mostrará que en el periodo 2002 – 2005 la acción articulada e integral del Estado central y local, permitió el desescalamiento del conflicto armado urbano y una profunda mejoría de los indicadores de seguridad y violencia homicida.

La exposición asume que el problema de la violencia en Medellín es complejo, esto es, que debe hablarse propiamente de violencias en la medida en que se presenta una confluencia del conflicto armado, con expresiones violentas propias de la criminalidad organizada, las manifestaciones más típicas de la violencia difusa, publicidad de formas a veces ocultas –como la violencia intrafamiliar– e, incluso, usos indebidos de la fuerza física por parte de las autoridades.

Eludiendo las discusiones recientes sobre la naturaleza del conflicto armado, se usan indistintamente las expresiones “conflicto armado” o “guerra” para señalar el proceso en el que los grupos armados ilegales que poseen estrategias y alcance nacional, hacen presencia en la región de Medellín¹.

1. Correlación entre escalamiento de la guerra y aumento de la inseguridad

En la sociedad contemporánea la violencia es un concepto amplio y pleno de equívocos hasta el punto de que algunos estudiosos consideran que es una categoría confusa y que se ha tornado muy poco útil para las disciplinas sociales. Así, se ha pasado a llamar violencia a la discriminación (violencia étnica o sexual), la pobreza (violencia económica), el capitalismo (violencia estructural), la mala urbanidad (violencia gestual), las fiestas, el arte y el deporte (violencia simbólica). Françoise Héritier sugiere que la violencia antes que un concepto unitario debe ser considerada un tema (1996: 13). Esta observación es definitiva y nos indica por qué empezó a hablarse de “violencias”, siguiendo la recomendación de Hobsbawm (1999: 193).

La necesidad de especificación parte, por supuesto de la distinción entre guerra –o conflictos armados, para usar el lenguaje jurídico internacional– y violencia. La distinción se mantiene incluso entre quienes sostienen, razonablemente, que los contextos de guerras civiles, intrasociales, o, más ampliamente, “nuevas guerras”, generan un ambiente de anomia, impunidad e incentivo al delito que incrementan las diferentes formas de violencia e inseguridad y que, por consiguiente, no se trata sólo de que se pierdan las fronteras entre la violencia política o bélica y la violencia criminal, sino de que, en general, los campos de batalla son sustituidos o desplazados por la violencia difusa (Münkler, 2005: 109).

Una reciente incursión teórica en el tema, pretende profundizar esta distinción en el ámbito de la guerra, en un esfuerzo por entender las dinámicas de la violencia en medio de conflictos armados internos. Esto implica diversas hipótesis: (a) que la violencia guarda algún tipo de correlación con la guerra y que debería estudiarse como una variable independiente, cuando concurren temporal y geográficamente; (b) que la violencia se diversifica espacialmente según las condiciones de la guerra; y (c), por tanto, que la violencia en la guerra civil no parece ser un “proceso aleatorio, caótico y anárquico” (Kalyvas, 2001: 4).

En Colombia, los estudios recientes sobre el tema han mostrado que los homicidios comunes y políticos se comportaron de manera similar durante largo tiempo, al menos en las décadas de 1970 y 1980, lo que “puede ratificar el papel catalizador de la criminalidad organizada en la violencia política” (Gutiérrez, 2006: 484). En general, una corriente importante de la literatura establece fuertes vínculos entre la

¹ Se habla de la región de Medellín para describir tanto la ciudad como la región de la que hace parte geoestratégicamente y que incluye los once (11) municipios del Valle de Aburrá, seis (6) municipios del Oriente, cuatro (4) del Occidente, dos (2) del Norte y tres (3) del Suroeste.

actividad guerrillera y paramilitar con el incremento del crimen (Levitt y Rubio, 2002; Sánchez, Díaz y Formisano, 2003). Barrera observó que las “municipalidades con más ataques de la guerrilla muestran más crímenes” y que “los años con más ataques también presentan las tasas más altas de criminalidad” (2004: 15). Estas conclusiones, que se sobreentendían siempre válidas para municipios pequeños, mostraron ser aplicables a grandes ciudades como Medellín.

La reiteración de esta tesis tiene interés para el caso de Medellín porque algunos analistas han sostenido que en Colombia el descenso del homicidio en las grandes ciudades tiene explicaciones exclusivamente locales y no vinculadas con las políticas de seguridad y acciones del Gobierno central. Además, porque hay indicios de que, ya para los años 1990 y lo que va corrido del siglo XXI, “la dinámica del conflicto, tanto en términos de número de eventos como en términos de su intensidad, no sigue en general la misma tendencia de la tasa de homicidios” (Restrepo et al., 2006: 518). Las conclusiones de este análisis van en vía contraria: en Medellín el comportamiento de las tasas de homicidio tiene relación directa con la intensidad del conflicto y las políticas nacionales han incidido en el desempeño de la seguridad en la ciudad.

En efecto, las curvas ascendentes en la tasa de homicidios coinciden con el escalamiento, a fines de los años 1980 y a comienzos del nuevo siglo, de la ofensiva narcoterrorista y el crecimiento del fenómeno miliciano en la ciudad, para el primer momento, y la estrategia de urbanización de la guerra por parte de las guerrillas y las autodefensas, en el segundo. De la misma manera, los descensos más pronunciados en la tasa de homicidios tienen como precisos puntos de partida los acuerdos de paz de 1990, la desarticulación del Cartel de Medellín y la muerte de Pablo Escobar (en diciembre de 1993) y la Operación Orión en la Comuna 13 (en octubre del 2002) y la desmovilización del Bloque Cacique Nutibara (diciembre del 2003), ambas decisiones de los respectivos gobiernos nacionales (Gráfica 1). Nótese que la dinámica que oscila entre acuerdos de paz y acciones militares de envergadura es más propia de los conflictos armados que de lo que usualmente entendemos cuando se habla de seguridad ciudadana, problemas de convivencia o simple criminalidad.

Gráfica 1



Para el periodo 2000 – 2005, la implantación de las guerrillas y las autodefensas en los barrios de la ciudad y la consiguiente disputa por la hegemonía armada entre ellos, condujo a que, en el 2002, la región de Medellín aportara el 81% de los homicidios, el 93% de las masacres y el 70% de los secuestros del departamento de Antioquia (Gobernación de Antioquia, 2002). El informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, correspondiente a ese año, aseguró que “el aumento de las acciones militares en las zonas urbanas y el fuerte incremento en el número de grupos milicianos, vinculados a las Farc-Ep, al Eln y a grupos paramilitares, produjeron un alza en los homicidios y las masacres en las ciudades” (2003: 55).

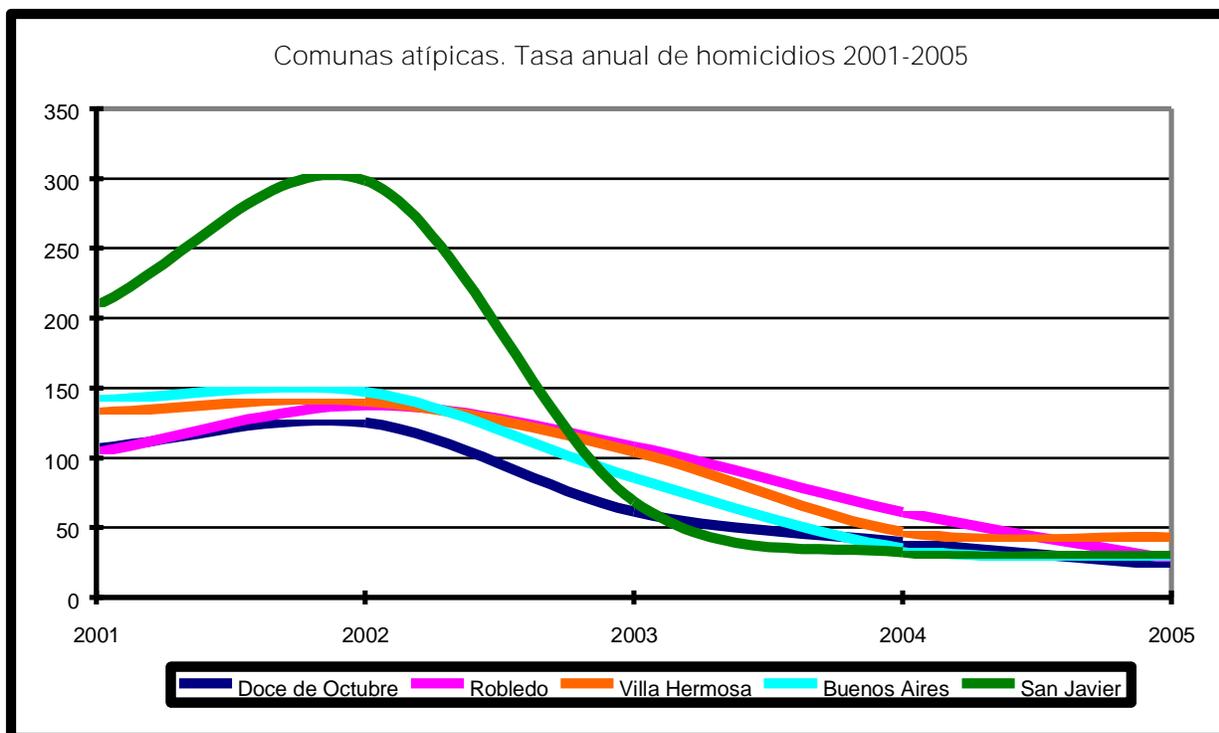
Modalidades más frecuentes en las zonas rurales que en las urbanas empezaron a usarse: cadáveres bomba en Belencito (abril 20 y agosto 30 del 2002); uso de fosas comunes para sepultar bajas propias o víctimas de ejecuciones fuera de combate, que empezaron a ser descubiertas en agosto del 2003; combates con alto número de bajas (febrero 27, 5 muertos; mayo 21, 9 muertos y 37 heridos; mayo 27, 1 muerto y 5 heridos; junio 26, 6 muertos; agosto 21, 4 muertos); patrullajes a luz del día de unidades numerosas, uniformadas y portando armas largas (Vicepresidencia, 2002). Bajo algunos parámetros internacionales establecidos para países enteros, Medellín cumplía las condiciones de un conflicto armado pues los enfrentamientos entre el Estado y sus contendientes armados producían más 25 muertes anuales en batalla (Eck, 144). Tales condiciones en un centro urbano altamente poblado, generan terribles problemas en la observación del derecho humanitario. De hecho, para el 2002 “serían por los menos 39 los muertos civiles reportados en todos los operativos de la fuerza pública en Medellín durante el año (entre ellos 14 menores de edad) y 120 los heridos” (Alto Comisionado, 2003: 56).

Este momento crítico del 2002 se caracterizó, además, por ataques directos a los representantes del Estado en la región tales como el abaleo de una comisión que visitaba la Comuna 13 encabezada por el Alcalde de la ciudad en abril; el hostigamiento a un helicóptero civil de la Gobernación de Antioquia en el barrio 20 de Julio una semana después del secuestro del Gobernador del Departamento, en mayo; en septiembre lanzaron una granada en el conjunto residencial donde vivía el padre del Gobernador Guillermo Gaviria Correa.

Lo cierto es que el escalamiento del conflicto en el país en el periodo 1998 – 2002 rompe con la tendencia de crecimiento negativo del homicidio en Medellín y las tasas anuales empiezan, de nuevo, a crecer a ritmos del 7.55% (1998 a 1999), 9.03% (2000 a 2001) y 5.79% (2001 a 2002). La variación negativa, anómala, es de -4.13% entre 1999 y 2000.

Una mirada más atenta, enfocada en los territorios de la ciudad, nos muestra que durante el período 1993 – 2005 las tasas anuales de homicidio descendieron siempre en 11 de las 16 comunas. Las 5 restantes (Buenos Aires, Doce de Octubre, Robledo, San Javier y Villa Hermosa) tuvieron un comportamiento atípico al mostrar incrementos sostenidos entre el 2000 y el 2002. Esos incrementos son los que explican el aumento global de la tasa de homicidios en la ciudad en los mismos años (Ver Gráfico 2 y Tabla 1).

Gráfico 2



Esas comunas, a saber, 6, 7, 8, 9 y 13, fueron también el principal escenario de combates entre las guerrillas, autodefensas y fuerza pública en esos años cuando los eventos armados se desplazaron del norte de la ciudad a las zonas Centrooriental y Centrooccidental. No debe pasarse por alto que estos combates hacían parte de las guerras entre los Bloques Metro y Cacique Nutibara de las autodefensas, entre guerrillas y autodefensas, y de la fuerza pública contra ambos. Aquí guerrillas alude a las Farc y el Eln, sus fuerzas milicianas y sus aliados de los Cap y otros actores primarios del conflicto armado (bandas y combos). Diversas denuncias sobre complicidad o funcionalidad de algunas unidades de la fuerza pública y las autodefensas, incrementan la complejidad de la configuración de la guerra urbana².

Tabla 1
Tasa anual de homicidios por comuna 2001 – 2005

Comuna	2001	2002	2003	2004	2005
Popular	293	286	121	40	28
Santa Cruz	250	193	123	62	28
Manrique	210	141	100	41	23
Aranjuez	147	146	105	63	44
Castilla	150	110	96	67	36
Doce de Octubre	107	125	61	40	23
Robledo	104	138	108	61	28
Villa Hermosa	132	141	104	47	43
Buenos Aires	142	148	86	35	28
Candelaria	588	396	341	233	152
Laureles-Estadio	66	59	61	52	27
La América	94	79	39	37	19

² Entre otras, en septiembre del 2004 fue capturado un capitán del Ejército, acusado de proteger a miembros de las autodefensas (Vicepresidencia, 2004).

San Javier	209	299	69	32	31
El Poblado	82	45	30	23	14
Guayabal	153	131	76	65	50
Belén	104	87	52	49	35
Corregimientos	115	115	98	35	35

2. Dos factores explicativos del escalamiento del conflicto armado

La importancia que tomó el conflicto armado en Medellín entre 1998 y 2002, se explica por dos factores dependientes de las políticas del Estado y los grupos armados ilegales, respectivamente. Ellos son: De un lado, el desentendimiento del Estado central respecto a la fenomenología de la guerra en los grandes centros urbanos y la renuncia del Estado local –en el caso de Medellín– a cumplir con la salvaguarda exclusiva del bien público de la seguridad, configurándose así una situación de “retiro del Estado”. Del otro, el escalamiento de la guerra y la voluntad de los actores armados que conducen la guerra a las grandes ciudades.

2.1. El retiro del Estado

En este apartado, se retoman las conclusiones de Alonso, Giraldo y Sierra (2006).

La hipótesis principal señala que “el discurso y las acciones que dieron forma a las políticas de seguridad ciudadana en Medellín en la década de los noventa, propiciaron, agenciaron y justificaron el desplazamiento o retiro intencional y paulatino del Estado de la gestión del conflicto, produjeron un modelo de negociación permanente del desorden marcado por el papel preponderante de los intermediarios armados”.

Fueron varios los factores que condujeron a ese estado de cosas que entró en crisis en el año 2002:

- § Dominó la percepción de que la violencia que vivía la ciudad no había surgido, ni era exclusiva de Medellín, ni, por lo tanto, era responsabilidad principal del gobierno local resolverla.
- § Se produjo una suerte de bandazo que consistió en rechazar como equivocado el “tratamiento represivo” al narcoterrorismo y el sicariato, y que la estrategia debía centrarse en la “autogestión del conflicto” por parte de las comunidades y el buen funcionamiento de los servicios de seguridad y justicia, si participativos y concertados, tanto mejor (Pérez y Vélez, 1997).
- § Diversas administraciones municipales en los años 1990 indujeron a diversas formas de privatización de la gestión de la seguridad y a instrumentalizar pactos con grupos armados para el logro de la gobernabilidad.

Todo esto terminó beneficiando “a las numerosas organizaciones armadas dispuestas a ofrecer servicios y funciones de seguridad y justicia en las comunidades” (Alonso, Giraldo y Sierra 2006).

El resultado de la gestión de seguridad esa década fue que se procuró obtener resultados positivos en los diversos indicadores de criminalidad a costa de la preservación o el incentivo de condiciones que deteriorarían tanto la seguridad estatal como la de los ciudadanos en el mediano plazo, es decir, lo que Jon Elster denomina “trampas de equilibrio” (1992: 105). Así, los procesos de mediación y la firma de pactos con y entre grupos armados, “fueron instrumentalizados por cada uno de los diversos sectores involucrados directa o indirectamente en ellos (gobierno local, actores del conflicto armado y los mismos combos, bandas y milicias) para lograr propósitos concretos, diferenciados y, en ocasiones, complementarios o contradictorios entre sí” (Vélez, 2001: 81). Los gobiernos locales sacrificaron la política de Estado en aras de mostrar resultados favorables puntuales, convirtiéndose a sí mismos en uno más, a lo mejor un *primus inter pares*, entre otros actores locales del conflicto armado. Un balance amplio de estos procesos adelantados arroja 57 pactos de no agresión con igual número de bandas o milicias en 71 barrios ubicados en 5 de las 6 comunas de Medellín y, después, 28 mesas barriales que cumplían más o menos la misma función³.

³ Fuente: Asesoría de Paz de Medellín. Citado por Sierra (2005).

Los resultados son modestos: entre 1992 y 1998 la variación promedio en la tasa anual de homicidios fue del 9%; en 1993 abandonamos las tasas superiores a 300 homicidios por cada 100 mil habitantes pero nunca descendimos de 155, ni retornamos a la situación de 1987, que ya era indeseable; Medellín continuó siendo la ciudad de mayor violencia homicida en Colombia y el mundo.

Lo que podemos encontrar en Medellín a comienzos del nuevo siglo es que el Estado local no sólo no había logrado monopolizar el uso de la fuerza sino que parecía que hubiera renunciado a esa pretensión, produciendo resultados negativos en cuanto al monopolio de la ley y al monopolio financiero. Para ser más comprensivos con los formuladores de las políticas públicas en los años de referencia digamos que, siguiendo el espíritu dominante, se volcaron hacia la seguridad ciudadana, entendida como énfasis en la prevención como estrategia y en la calidad de vida como resultado, y subestimaron la seguridad pública o estatal, que tiene como eje estratégico la coacción y el orden como objetivo⁴.

Efectivamente, la desarticulación del Cartel de Medellín no significó la recuperación del monopolio de la fuerza sino su fragmentación. En el 2002 diversos estimativos calculaban cerca de 650 bandas armadas en la ciudad (El Mundo, 2002), sumadas a tres bloques de las autodefensas (José Luis Zuluaga, Bloque Metro y Bloque Cacique Nutibara); dos frentes, un proyecto y una estructura urbana del Eln (Carlos Alirio Buitrago, Bernardo López, el Proyecto Romeral y el Regional Medellín, aglutinados en la llamada Área Industrial); el grupo miliciano independiente Comandos Armados del Pueblo; y diversas estructuras del Bloque José María Córdova de las Farc (Semana, 2002; Sierra, 2005).

La cesión del control territorial por parte del Estado local a bandas, milicias, autodefensas y guerrillas les permitió a estos constituir “órdenes volátiles y transitorios en determinados territorios de la ciudad, donde son aplicadas y aceptadas legalidades diferentes de la estatal, donde existe una oferta de seguridad y justicia inmediata sustentada en el uso y concentración creciente del recurso a la fuerza” (Vélez, 2001: 71). Esos órdenes paralelos, aunque sostenidos precariamente en los barrios periféricos de Medellín y en algunos municipios del Valle de Aburrá, se expresaron en la gestión de la seguridad y el desarrollo de mecanismos de exacción económica de la población (Cinep & Justicia y paz, 2003: 43-44). La extorsión, como mecanismo de financiación de los integrantes de estos grupos, se generalizó en muchos barrios bajo la forma de tributos cobrados a comerciantes, transportadores y vecinos. Además, “las fuerzas guerrilleras habían convertido la zona [Comuna 13] en un centro para la retención de secuestrados. Cada día salían por las calles de Medellín a retener al azar –conocida como secuestro *express*– a personas de muy diversos estratos a los que 'encaletaban' en la zona” (Semana, 2002).

En palabras de la investigadora María Teresa Uribe, el Estado “ante la dificultad real por imponer, hace reconocer y acatar el orden republicano ciudadano y por el camino de las transacciones y los acuerdos precarios, termina por negociar el desorden dentro de ciertas reglas de juego y regularidades más o menos explícitas, que solo existen como tales en esa zona difusa, semipública –semiprivada– donde los órdenes político-institucionales y los órdenes societales se entrecruzan” (Uribe, 1997a: 171). Este retiro del Estado local le permitió a los actores del conflicto armado (paramilitares y guerrillas) fortalecerse militarmente en muchos barrios de la ciudad, ocupar un destacado lugar en la oferta de seguridad y aprovechar los medios políticos, institucionales y económicos a su alcance para el logro de cierta forma de institucionalización (Alonso, Giraldo y Sierra 2006).

2.2. La nacionalización del conflicto armado en Medellín

Para el año 2001 ya es clara la convergencia de la dinámica local de inseguridad ciudadana y conflictividad armada, el escalamiento de la guerra que libran actores nacionales y la decisión expresa de guerrillas y autodefensas de urbanizar el conflicto.

⁴ Para la distinción entre ambas categorías, véase Rivas (2005: 86).

La expansión de los actores armados a los centros urbanos se ha cumplido en Colombia en seis estadios más o menos claros (PNUD, 2003: 60): como sede de redes de apoyo, como escenario puntual de acciones logísticas, como lugar de la “guerra sucia”, como asentamiento barrial o comunal de fuerzas con capacidad de ejercer cierto control territorial, como teatro de combates ocasionales y objetivo de acciones terroristas. Medellín ha cumplido todas esas funciones a lo largo de 40 años, en su función de centro del departamento del país con mayor número de unidades de todos los grupos armados ilegales, más los escuadrones del narcotráfico.

Lo que aquí se denomina urbanización de la guerra corresponde más precisamente a los tres últimos elementos enumerados. Esas fases se cumplen con mayor rapidez y eficacia debido que la extensa infraestructura de bandas, combos y milicias en los barrios de Medellín se convierte en “un recurso institucional más de paramilitares y guerrillas para avanzar en la guerra” (Vélez, 2001: 72). El fortalecimiento de la presencia guerrillera y paramilitar en la ciudad desde el año 2000 se da sobre el sometimiento de todos los grupos delictivos de la ciudad a la dinámica regional y nacional del conflicto armado, articulando así prácticamente todas las expresiones violentas de Medellín. Este sometimiento puede darse debido al enorme poder que las guerrillas y las autodefensas podían desplegar en barrios y comunas en las que imperaban bandas o milicias, pequeñas y de escaso radio de acción, desplazándolas en el ejercicio del dominio, subordinándolas a sus planes, copando la oferta de seguridad e insertándose “en la vida cotidiana de las comunidades como un agente de regulación y contención política” (Alonso, Giraldo y Sierra, 2006).

Sin duda, se trata de un resultado no deseado ni previsto por los programas de seguridad de los gobiernos locales desde 1990. Las intenciones contempladas en discursos apaciguadores, de tolerancia con los violentos o, incluso, de elaboración de un imaginario compasivo hacia los delincuentes, simplemente fueron instrumentalizadas por los distintos grupos criminales y convertidas en un factor adicional para su fortalecimiento y expansión en la ciudad.

Así, lo que desde 1994 operó como un sistema precario de limitación de la acción criminal y violenta a las zonas periféricas de la ciudad, se convirtió en el tejido social ilegal que facilitó la implantación de los actores nacionales del conflicto armado. Ella se dio de tres maneras: Por la vía tradicional prevista en la teoría maoísta de la guerra de guerrillas, de acercamiento de los grupos rurales a la periferia de la ciudad-región como fue el caso del Bloque Metro de las Auc y los frentes Carlos Alirio Buitrago y Bernardo López del Eln. Por la vía de la ocupación, como ocurrió con las Farc que desplazó curtidas unidades de guerrilla campesina (especialmente de los frentes 9 y 34) a las zonas nororiental y centrooccidental de la ciudad. Por la vía de la transformación y articulación de estructuras netamente urbanas como en el caso del Bloque Cacique Nutibara de las Auc. De esta manera, la expansión de la guerra nacional a Medellín se da por dos de los tres factores que identificó el *Informe Nacional de Desarrollo Humano*: la estrategia de los actores del conflicto y la permeabilidad de la región (PNUD, 2003: 64-72).

Por supuesto, esta dinámica y la nueva realidad que implicó, supusieron la inclusión cada vez mayor del espacio ciudadano en las estrategias estatales de guerra. La pretensión de separar la convivencia ciudadana, la seguridad urbana y la seguridad del Estado se esfuma ante la inflexión que supuso este anudamiento de trayectorias criminales en el mismo escenario urbano a principios del siglo. Obviamente, las políticas locales eran sobrepasadas por la dimensión y complejidad del conflicto y demandaban una articulación con los niveles departamental y nacional que, en el pasado, eran precarias o simplemente inexistentes.

Esto también difuminó las fronteras entre las organizaciones criminales vinculadas a la economía ilegal, los grupos armados de origen societal en los barrios y las unidades jerarquizadas de guerrillas y autodefensas. Además, supuso una intensificación de lo que la profesora Uribe denominó los “flujos y porosidades” que permitieron la transformación drástica de sicarios en autodefensas, bandidos en milicianos, guerrilleros en paramilitares y cualquiera otra combinación imaginable (Uribe, 1997b: 132).

Peor aún, el origen social de combos y milicias, la íntima vinculación de intereses entre bandas y organizaciones delictivas con la vida barrial, la variabilidad de los liderazgos –a veces armados, a veces vecinales, otras políticos– llevaron a que la esencial penumbra que se da en los conflictos internos entre combatientes irregulares y civiles (Kaldor, 2001; Münkler, 2005) se hiciera todavía más densa. La Medellín de principios de siglo ha vivido la tensión entre la organización social y la armada, y los correspondientes líderes e influencias.

3. Correlación entre desescalamiento del conflicto armado y aumento de la seguridad

Como se sostuvo antes, el homicidio y los delitos de mayor impacto social tienen una correlación directa con la intensidad del conflicto armado. Al menos, en el caso de Medellín, se afectan de manera grave y en tasa muy altas cuando los ejércitos ilegales y las bandas armadas al servicio del crimen organizado pueden actuar fácil e impunemente.

Dada la importancia del tema, en este numeral recabamos sobre tres casos ilustrativos, relacionados con este aspecto, y que ilustran tres acciones distintas que guardan nexos fuertes con el descenso del homicidio en Medellín: (a) acciones punitivas de clara naturaleza militar, como la Operación Orión en la Comuna 13; (b) acciones diplomáticas como la negociación y desmovilización del Bloque Cacique Nutibara de las Auc; y (c) acciones complejas, sociales y policiales, de reducción de los denominados actores primarios del conflicto armado.

3.1. Comuna 13: un caso de acción punitiva militar

El citado informe de Naciones Unidas especifica que “sólo en la Comuna 13 de Medellín la Secretaría de Gobierno de Antioquia registró 442 muertes violentas entre combatientes y civiles entre el 1° de enero y el 9 de octubre de 2002. Esto representa un aumento superior al 100% en relación con 2001” (Alto Comisionado, 2003: 14). El gráfico es elocuente en cuanto a la importancia de la Comuna 13 en esta inflexión en el comportamiento del homicidio en Medellín.

Una investigación pormenorizada de lo que pasó en la Comuna 13 entre el 2001 y el 2003 es todavía tarea pendiente y la Administración del Alcalde Sergio Fajardo ha propuesto la conformación de una Comisión de la Verdad sobre el asunto, lo que ya de por sí es demostrativo de las dimensiones y del carácter de los acontecimientos. Propuesta del todo pertinente dadas los incontables indicios del sometimiento que vivió la población civil por parte de las guerrillas y la posterior secuela de acciones criminales de las autodefensas que puede haber arrojado un saldo de 50 desaparecidos en el primer trimestre del 2003,⁵ así como el asesinato de la líder comunal Teresa Yarce en el 2004 (Vicepresidencia, 2004).

Acá se sostiene la tesis de que se trató de una fase de la expansión de la guerra entre los actores nacionales del conflicto a la región de Medellín. La manera como se desarrolló la Operación Orión, ordenada por el Gobierno nacional y presentada como retoma de la zona por el Estado, reafirma esta aseveración. La Operación Orión fue una operación conjunta de las fuerzas del Estado donde participaron, junto a la Policía y el Ejército, la Fuerza Aérea, el DAS y la Fiscalía. Se desarrolló intensamente entre el 16 y el 18 de octubre del 2002 en los barrios 20 de julio, las Independencias, Belencito, El Corazón, Nuevos Conquistadores y El Salado.

La iniciativa estatal contó con una resistencia notable por parte de unidades guerrilleras de las Farc, el Eln y los Cap. El balance final así lo confirma: 10 muertos de la insurgencia, 4 de la fuerza pública y 4 civiles, al parecer uno de ellos fuera de combate (El Colombiano, 2005)⁶. Si aplicásemos el criterio internacional

⁵ Exactamente entre el 29 de noviembre del 2002 y el 22 de marzo del 2003. Los datos provienen de una fuente no gubernamental y reservada, que el autor considera fidedigna.

⁶ Los miembros de la fuerza pública muertos fueron: “Mario Alonso Villegas García, de 24 años de edad, teniente de Fragata de la Infantería de Marina; Juan Carlos López Grisales y Johny Enrique Álvarez Salas, soldados del Batallón Granaderos de

para distinguir un ataque de un combate, a saber, la proporción de bajas entre los bandos, ello arroja una relación de 1 miembro de las fuerzas estatales muerto por 2.25 de las fuerzas insurgentes, es decir, 29% y 71%, respectivamente. El estándar definido para los estudios cuantitativos de las guerras establece que no más del 95% de las bajas las haya sufrido un solo bando (Harborn, 2004; Gutiérrez, 2006: 484). Estamos evidentemente en presencia de un combate entre bandos armados, como lo afirmaban los pobladores y no de violencia unilateral del Estado, como de manera ligera han sostenido algunos⁷.

Durante los combates hubo 40 civiles heridos, entre ellos 16 menores de edad, 5 desaparecidos y 308 detenidos, de los cuales 233 fueron judicializados y 56 seguían procesados en septiembre del 2005. El balance hubiera resultado peor, pero “un gran número de milicias guerrilleras abandonó el lugar en la noche previa al inicio de la operación, sabiendo que iba a ocurrir”⁸. Aún así, la fuerza pública se incautó de 20 fusiles, una subametralladora, dos carabinas con mira telescópica, cuatro lanzagranadas de 40 milímetros, 50 kilos de explosivos, municiones y equipos de comunicación.

Algunos detalles pueden ilustrar mejor que se trató de una acción de guerra: El 15 de octubre la Policía desactiva 5 cargas explosivas en las calles de la Comuna, el 16 se desactiva un bus cargado con dinamita que bloqueaba una vía de acceso a la zona, el mismo 16 el Batallón 44 es atacado con granadas. La ciudad se ve abocada a una ola de atentados terroristas en otras zonas como el Barrio Laureles y el Parque Lleras (Vicepresidencia, 2002), al parecer como maniobras de distracción del operativo.

3.2. Desmovilización del Bcn: un caso de acción diplomática

La desmovilización del Bloque Cacique Nutibara –Bcn– ilustra los efectos del otro tipo de acciones típicas de los conflictos armados, acuerdos de paz, desactivación de grupos, reinserción masiva de combatientes. En el periodo que nos atañe se produjo, en un principio, el 25 de diciembre del 2003, la reincorporación a la sociedad de 874 miembros de dicho bloque de las Autodefensas Unidas de Colombia –Auc– como primer episodio de una larga cadena de desmovilizaciones parciales en el marco del inédito proceso de diálogo o negociación que lideró el Gobierno nacional.

Los efectos netos de la desmovilización del Bcn son muy difíciles de precisar. Sin duda, sería descabellado presumir que tal hecho no tuvo ninguna consecuencia, tanto como resulta erróneo afirmar que de allí dependió el quiebre vertical que se presentó en las tasas de homicidio y criminalidad en Medellín. La superposición de los efectos de todas las acciones precedentes impiden hacer afirmaciones que apunten a una sola política: la Operación Orión, otras operaciones urbanas como Estrella VI, operaciones rurales importantes para la región de Medellín como la Operación Marcial en el Oriente antioqueño, más las acciones locales de seguridad y las consecuencias de largo alcance de estrategias sostenidas de convivencia.

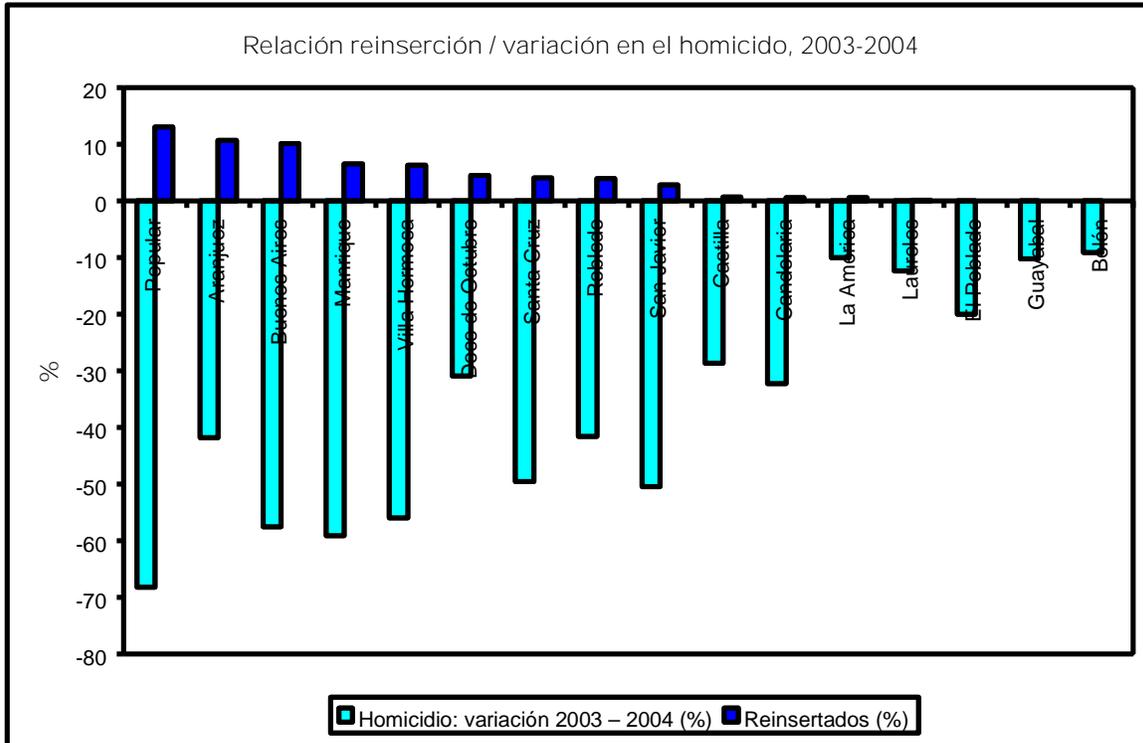
Para este análisis se hizo un ejercicio elemental de confrontación entre las tasas de homicidio del 2003 y el 2004, que es el momento en el que se pueden focalizar los efectos de la reinserción (Gráfico 3 y Tabla 2).

Gráfico 3

Conraguerrilla, y Diego Andrés Acosta Herrera, de 21 años, oficial de la Policía Nacional, adscrito a la estación Belén” (El Colombiano, 2002).

⁷ Un habitante de la zona afirmó que fue “una disputa armada entre guerrilla y autodefensas que duró más de tres años” (El Colombiano, 2002). El documento especial sobre la crisis, de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz asegura que “no fue una guerra entre dos bandos enfrentados, sino de una guerra desatada desde el Estado con toda su capacidad de arrasamiento contra la población civil indefensa” (Cinep & Justicia y paz, 2003: 6).

⁸ Los datos provienen de una fuente no gubernamental y reservada, que el autor considera fidedigna.



En general, se observa una tendencia directamente proporcional entre la desmovilización y la disminución del homicidio por comuna. Es claro que las comunas con menor número de desmovilizados presentan, también, el descenso más modesto en la tasa anual de homicidio (Gráfico 3). Para las zonas Nororiental y Centrooriental, en las comunas Popular y Villa Hermosa especialmente, se detecta una alta correlación entre el volumen de reinsertados y la disminución del homicidio. El caso más anormal es el de Corregimientos que han jugado siempre un papel importante como retaguardia suburbana de todo tipo de agrupaciones ilegales en la ciudad, y que tuvieron un gran descenso en el homicidio sin que fueran lugar de residencia o procedencia de los desmovilizados (Tabla 2). San Cristóbal, San Antonio de Prado, Altavista y, en menor proporción, Palmitas, fueron escenarios frecuentes de eventos relacionados con el conflicto armado en este periodo.

Tabla 2
Reinserción y homicidio (por zona)

Zona	Homicidio: variación 2003-2004 (%)	Reinsertados (%)*
Nororiental	-55,1	34,6
Noroccidental	-34,5	9,2
Centrooriental	-43,5	17,1
Centrooccidental	-29,3	3,5
Suroriental	-20	0
Suroccidental	-9,6	0
Corregimientos	-60,4%	0,6

Los demás reinsertados se distribuyen así: muertos, 1,8%;
detenidos, 3,7%; resto de Valle de Aburrá, 3,9%; otros municipios, 0,3%

3.3. Reducción de actores primarios: un caso de intervención social y policial

Partimos de las definiciones de combos y bandas, establecidas en términos descriptivos por el gobierno municipal⁹. Además, en esa descripción consideran que hay un proceso evolutivo que se origina en los combos y que va sufriendo etapas, cada vez de mayor complejidad en la organización, lo que da la forma final a una especie de estructura de estos distintos tipos de grupos que actúan en el espacio social de la ciudad. Por supuesto, la información cuantitativa disponible constituye apenas una estimación.

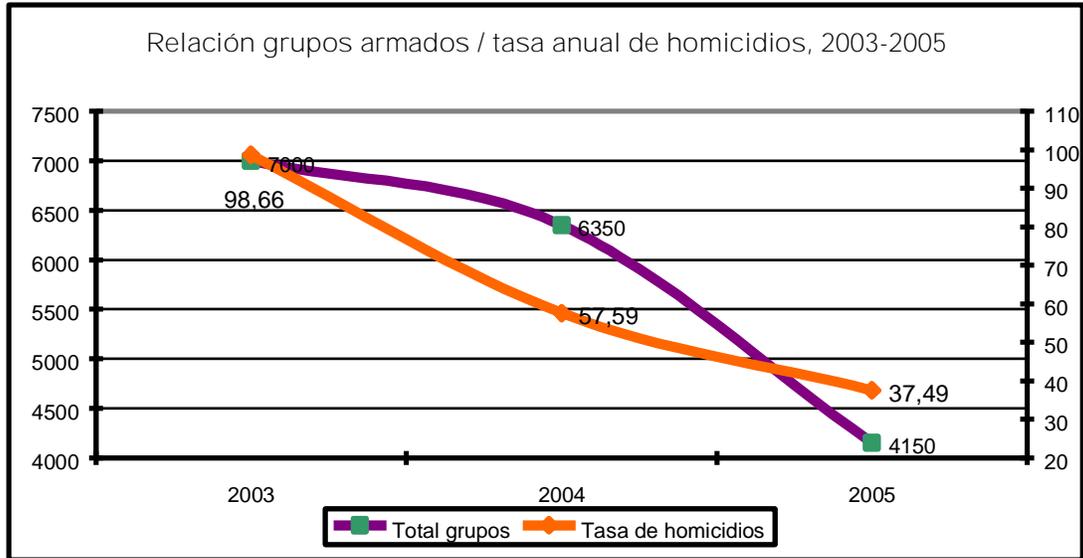
Para el 2003, el número de combos en la ciudad era de 6.300 y a partir de allí empiezan a disminuir hasta 5900 en 2004, para bajar tendencialmente a 4.000 en el 2005. Importante entonces destacar la tendencia radical hacia la disminución en el lapso de tres años. Es decir que en este corto periodo los combos disminuyeron en un 36,51%. A pesar de ello, los combos siguen siendo un mecanismo de socialización que por sus características y sobre todo por sus dinámicas y papel en el fenómeno de violencia y criminalidad en la ciudad, constituyen todo un reto para la sociedad y particularmente para el gobierno municipal. Se trata de un número muy alto de este tipo de organizaciones, lo cual podría significar que estos grupos podrían ser, una de las unidades básicas y peculiares de organización de los intereses sociales con tendencia dominante hacia una expresión conflictiva y violenta en la ciudad.

Las bandas reconocidas en el 2003 eran 200 y disminuyen en una proporción muy importante, hasta 150 en 2004 y, finalmente, hasta 100 en 2005. Para el 2003 se reconocen 350 grupos de autodefensas y 150 de milicias. Ya para el 2005, se identifican 50 grupos de milicias y se constata la ausencia de grupos de autodefensas. La proporción de disminución de las milicias es de 66,67% y la de las autodefensas, desde luego, es de 100%.

En lo que nos interesa, se puede afirmar que la disminución del número de grupos armados incide en el proceso global de disminución de la tasa de homicidios de la ciudad para el periodo mencionado (Gráfico 4). En los tres años considerados, el total de grupos armados desciende de 7.000 a 4.150, mientras la tasa anual de homicidios lo hace de 98,66 homicidios por cada 100 mil habitantes, en el 2003, a 37,39 en el 2005.

Gráfico 4

⁹ “Combos: Cuentan con un reconocimiento delincriminal en el barrio dónde se ubican, tienen un mínimo de jerarquía y se dedican a alguna actividad ilícita para conseguir dinero”. “Banda: Cuenta con una organización militar, económica y jerárquica definida, por lo general son personas mayores de edad, con una situación económica buena, sus líderes casi nunca viven en los barrios donde se acentúan y poseen sus vehículos propios, trabajan directamente para el narcotráfico, los paras o la guerrilla, casi nunca trabajan directamente sino que subcontratan con los combos las actividades a realizar, la mayoría de sus miembros han estado detenidos o se encuentran sindicados” (Alcaldía de Medellín, 2005).



Las líneas de disminución entonces muestran un paralelismo y correlación que sigue otorgando un peso importante, tal vez con carácter determinantes, a la disminución en este caso, de los dos grupos armados más importantes de la ciudad, las milicias y la desaparición de las autodefensas.

4. Conclusión

A la luz de este estudio, Medellín parece constituir un caso de correlación directa entre conflicto armado y violencia homicida, especialmente en el periodo estudiado 2000-2005, aunque con probables extrapolaciones para un periodo más largo (1988-2005), aunque esto no significa que la única variable crítica para el desempeño de los indicadores de seguridad de la ciudad sea el conflicto armado o el desafío militar que representó el aparato militar del narcotráfico a principios de los años 1990.

De esta manera, algunas posturas tradicionales que llegan a separar o contraponer la seguridad ciudadana y la seguridad, las acciones militares y las policivas, las estrategias políticas y las sociales, no resultan plausibles y, por el contrario, la conexión que la literatura contemporánea encuentra entre guerra e inseguridad se ve confirmada acá.

Desde la perspectiva de las políticas públicas, es significativo el efecto que las políticas del Estado central pueden tener sobre la seguridad pública en las zonas urbanas y el efecto positivo que tiene la preocupación del Estado local por atender la seguridad, que en el pasado –especialmente, en su faceta político-militar– no era adoptada como una función suya.

Bibliografía

- Alcaldía de Medellín, Programa de Paz y reconciliación 2005. “Actores primarios del conflicto armado”, Medellín, mimeo.
- Alonso, M., Giraldo, J., Sierra, D. 2006. “Medellín: El complejo camino de la competencia armada”. En Camila de Gamboa (Ed.), *Justicia transicional: Teoría y praxis*, Bogotá, Universidad del Rosario.
- Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 2003. “Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia”, E/CN.4/2006/9.

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 2006. "Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia", E/CN.4/2003/13.

Barrera Osorio, F. 2004. "Dynamics and causes of crime in Colombia", Bogotá, Fedesarrollo, (Third draft for comments).

Cinep & Justicia y Paz 2003. "Comuna 13, la otra versión", Bogotá, Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política.

Eck, K. 2004. "Collective Violence in 2002 and 2003", pp. 143-166. En L. Harborn (ed.) 2004. *States in Armed Conflict 2003*. Uppsala, Department of Peace and Conflict Research.

El Colombiano, "Tres años después del despertar en la 13", 30 de octubre del 2005.

El Colombiano, "Expulsados por la guerra regresan a la comuna 13", 24 octubre del 2002.

El Mundo, "650 bandas operarían en Medellín Ciudad: escenario de la confrontación armada", martes 26 de noviembre de 2002.

El Tiempo, "Los 27 casos que tiene en líos a tres brigadas del Ejército en Antioquia", domingo 11 de junio del 2006.

Elster, J. 1992. *El cambio tecnológico. Investigaciones sobre la racionalidad y la transformación social*, Barcelona, Gedisa.

Giraldo Ramírez, J. 2001. "Mejores conflictos, menos violencia, más democracia", Medellín, Alcaldía de Medellín.

Gobernación de Antioquia, Secretaría de Gobierno y Apoyo Ciudadano, "Informe de orden público", diciembre 31 del 2002.

Granda Marín, A., Ramírez, I. D. 2001. "Contexto general de la violencia en Medellín". Medellín, UPB.

Gutiérrez Sanín, F. 2006. "Tendencias del homicidio político en Colombia 1975-2004: una discusión preliminar". F. Gutiérrez Sanín (Coord. Acad.), Nuestra guerra sin nombre. Transformaciones del conflicto en Colombia, Bogotá, Norma-Iepri, 2006, pp. 475-504.

Harborn, L. (ed.) 2004. *States in Armed Conflict 2003*. Uppsala, Department of Peace and Conflict Research.

Héritier, F. 1996. *De la violence*. Paris, Odile Jacob.

Hobsbawm, E. 1999. *Gente poco corriente. Resistencia, rebelión y jazz*. Barcelona, Crítica.

Jaramillo, A. M. 1994. *Milicias Populares en Medellín: entre la guerra y la paz*. Medellín, Corporación Región.

Jaramillo, A. M. 1993. "Milicias populares en Medellín: entre lo privado y lo público". *Revista Foro*, Bogotá, noviembre.

Kaldor, M. 2001. *Las nuevas guerras. Violencia organizada en la era global*, Barcelona, Tusquets.

Kalyvas, S. 2003. "Violencia y guerra civil. Esbozo teórico", *Análisis Político* 42, Bogotá, Iepri – Universidad Nacional, pp. 3-25.

Levitt, S. and M. Rubio 2002. "Crimen en Colombia: Análisis y Sugerencias de Política", en *Reformas institucionales en Colombia* Alberto Asesina (ed.). Fedesarrollo y Alfaomega.

Münkler, H. 2005. *Viejas y nuevas guerras. Asimetría y privatización de la violencia*, Madrid, Siglo XXI.

Pérez, W. F., y Vélez Rendón, J. C. 1997. "Seguridad ciudadana y homicidio en Medellín". *Estudios Políticos*, No. 11. Medellín, Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia.

Pérez, W. F., Vanegas, A. L., Álvarez, C. M. 1999. "Las Políticas Públicas de control de la criminalización en Medellín", *Estudios Políticos*, No. 14.

PNUD, *Informe Nacional de Desarrollo Humano 2003. El conflicto, callejón con salida*, Bogotá, 2003. Dir. Hernando Gómez Buendía.

Programa de Paz y Reconciliación de la Alcaldía de Medellín 2004. "Actores primarios del conflicto armado". Medellín, mimeo.

Programa de Paz y Reconciliación de la Alcaldía de Medellín 2005. “Avances del proceso”. Medellín, 24 de enero, mimeo.

Restrepo, J. A., Spagat, M. y Vargas, J. F. 2005. “El conflicto en Colombia: ¿quién hizo qué a quién? Un enfoque cuantitativo (1988-2003)”. F. Gutiérrez Sanín (Coord. Acad.), *Nuestra guerra sin nombre. Transformaciones del conflicto en Colombia*, Bogotá, Norma-Iepri, pp. 505-540.

Rivas Gamboa, A. 2005 “Una década de políticas de seguridad en Colombia”, en P. Casas, A. Rivas, P. González y H. Acero. *Seguridad urbana y policía en Colombia*, Bogotá, Fundación Seguridad y Democracia, pp. 81-166.

Sánchez, F., A. M. Díaz y M. Formisano 2003. “Conflicto, violencia y actividad criminal en Colombia: un análisis espacial”, *Documentos CEDE*, No. 5, Marzo, Universidad de los Andes.

Semana, “Medellín, caso dramático”, Bogotá, Edición 1077, 23 de diciembre 2002.

Sierra, D. J. 2005. “Hacia una taxonomía del proceso urbano paramilitar y de autodefensas en la ciudad de Medellín”, Medellín, mimeo.

Uribe de Hincapié, M. T. 1997a. “La negociación de los conflictos en el ámbito de viejas y nuevas sociabilidades”. En. Jaime Giraldo Angel et. al. *Conflicto y contexto. Resolución alternativa de conflictos y contexto social*. Bogotá, Tercer Mundo, Instituto Ser de Investigaciones, Colciencias, p. 171.

Uribe de Hincapié, M. T. 1997b. “Antioquia: entre la guerra y la paz en la década de los 90”, *Estudios políticos*, No. 10, Medellín, Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia.

Vélez Rendón, J. C. 2001. “Conflicto y guerra: la lucha por el orden en Medellín”. *Estudios Políticos*, No. 18, Medellín, Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia.

Vicepresidencia de la República, Observatorio del Programa Presidencial para los Derechos Humanos y el DIH, “Bitácoras de prensa 2002”.

Vicepresidencia de la República, Observatorio del Programa Presidencial para los Derechos Humanos y el DIH, “Bitácoras de prensa 2003”.

Vicepresidencia de la República, Observatorio del Programa Presidencial para los Derechos Humanos y el DIH, “Bitácoras de prensa 2004”.

Vicepresidencia de la República, Observatorio del Programa Presidencial para los Derechos Humanos y el DIH, “Bitácoras de prensa 2005”.